



Sra. Salgueiro Cortiñas, Presidenta

Sr. Estella Hoyos, Consejero

Sr. Fernández Costales, Consejero

Sr. Pérez Solano, Consejero

Sr. Quijano González, Consejero y
Ponente

Sr. Madrid López, Consejero

Sr. Nalda García, Consejero

Sr. Sobrini Lacruz, Secretario

La Sección Segunda del Consejo Consultivo de Castilla y León, reunida en Valladolid el día 11 de mayo de 2006, ha examinado el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx*, y a la vista del mismo y tal como corresponde a sus competencias, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

I

ANTECEDENTES DE HECHO

El día 18 de abril de 2006 tuvo entrada en este Consejo Consultivo la solicitud de dictamen preceptivo sobre el *expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados por el oso en unas colmenas*.

Examinada la solicitud y admitida a trámite con fecha 21 de abril de 2006, se procedió a darle entrada en el registro específico de expedientes del Consejo con el número de referencia 427/2006, iniciándose el cómputo del plazo para la emisión del dictamen, tal como dispone el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por el Decreto 102/2003, de 11 de septiembre. Turnado por la Sra. Presidenta del Consejo, correspondió su ponencia al Consejero Sr. Quijano González.

Primero.- Con fecha 28 de julio de 2005, tiene entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en xxxxx una solicitud de indemnización, presentada por D. xxxxx, debido a los daños causados por el oso en varias colmenas de su propiedad, situadas en la localidad de xxxxx (xxxxx), dentro del término municipal de xxxxx.



Solicita una indemnización de 621 euros por los daños sufridos.

Acompaña el informe suscrito por el guarda forestal de la zona, de 7 de junio de 2005, sobre los daños producidos por el oso pardo. En éste se manifiesta que han sido dañadas dos colmenas tipo movilista, unas 24 horas antes de la elaboración del informe, con el siguiente resultado: "Cajones con 10 cuadros cada uno, sin alzas y con muy poca miel en este momento. Irrecuperable cajones, cuadros y enjambres de las colmenas atacadas".

En relación con el entorno manifiesta que "el daño lo ha provocado el oso, tanto por el destrozo del cajón como los panales comidos parcialmente, excrementos en los montes vistos próximos".

Segundo.- El 22 de agosto de 2005 el Delegado Territorial acuerda el nombramiento del Instructor del expediente, notificado al interesado el 30 de agosto siguiente.

Tercero.- Obra en el expediente el informe del jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de 5 de septiembre de 2005, en el que se indica:

"Primero.- Respecto a la especie causante de los daños, el oso pardo (*ursus arctos*), se encuentra dentro de las catalogadas como "En peligro de extinción" por el R.D. 439/90, en el que se regula el Catálogo General de Especies Amenazadas, y cuenta además con un Estatuto de Protección y un Plan de recuperación (...).

»Segundo.- El daño se localiza en terrenos incluidos dentro del ámbito de aplicación del citado Plan de recuperación del oso pardo.

»Tercero.- Visitado el lugar de los hechos (...) queda acreditada la existencia de indicios, por la forma del ataque así como la presencia de excrementos, marcas y panales rotos que permite afirmar que el daño es consecuencia de la entrada de un oso pardo.

»La cuantía de la indemnización (...) asciende a 279,84 euros".



Cuarto.- El día 8 de septiembre de 2005, concluida la instrucción del expediente, se da audiencia del mismo al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, a efectos de que formule las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime oportunos. El interesado, el 22 de septiembre de 2005, comparece en las dependencias del Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitando copia de determinados documentos.

El 28 de septiembre de 2005 el interesado presenta un escrito, en el que formula, entre otras, las siguientes alegaciones:

“(…) El número de colmenas dañadas no son dos, sino tres. (...) La valoración, por tanto que yo hago es de (...) 657 euros”.

Quinto.- Con fecha 22 de marzo de 2006, se formula la propuesta de resolución en el sentido de que procede estimar la reclamación formulada, ascendiendo el montante indemnizatorio a 339,84 euros, al considerarse únicamente probada la destrucción de dos colmenas. La propuesta toma en consideración la tasación económica elaborada por la Sección de Espacios Naturales y Especies protegidas, advirtiendo no obstante un error en la misma, puesto que “tratándose de dos colmenas, únicamente contabiliza la pérdida de 10 kg de miel cuando lo correcto serían 20 (10 kg/colmena)”.

Sexto.- El 23 de marzo de 2006 la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial informa favorablemente sobre la propuesta de resolución indicada.

En tal estado de tramitación, se dispuso la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para que emitiera dictamen.

II CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1ª.- El Consejo Consultivo de Castilla y León dictamina en el presente expediente, con carácter preceptivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.h), 1º de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo



Consultivo de Castilla y León, correspondiendo a la Sección Segunda emitir el dictamen según lo establecido en el punto 4º, regla B), apartado g), del Acuerdo de 30 de octubre de 2003, del Pleno del Consejo, por el que se determina el número, orden, composición y competencias de las Secciones.

2ª.- El procedimiento se ha instruido con arreglo a lo previsto en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollados por el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

3ª.- Concurren en la parte interesada los requisitos de capacidad y legitimación exigidos por la referida Ley 30/1992. La competencia para resolver la presente reclamación corresponde al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, en virtud de lo establecido en los artículos 142.2 de la mencionada Ley 30/1992 y 19 del Decreto 297/1999, de 18 de noviembre, de atribución de competencias de la Junta de Castilla y León al Consejero de Medio Ambiente y de desconcentración de otras en sus órganos directivos centrales y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.

4ª.- El artículo 106.2 de la Constitución establece que “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

La referencia constitucional a la ley debe entenderse hecha a los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la que además se remite el artículo 82.1 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 1 de marzo, 21 de abril y 29 de octubre de 1998; 28 de enero de 1999; 1 y 25 de octubre de 1999), así como la doctrina del Consejo de Estado (Dictámenes de 27 de marzo de 2003, expte. nº 183/2003; 6 de febrero de 2003, expte. nº 3.583/2002; y 9 de enero de 2003, expte. nº 3.251/2002), la



responsabilidad patrimonial de la Administración Pública exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

b) El carácter antijurídico del daño, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la ley.

c) La imputabilidad a la Administración de la actividad dañosa, es decir, la integración del agente en el marco de la organización administrativa a la que pertenece o la titularidad pública del servicio o la actividad en cuyo ámbito se produce el daño.

d) La relación de causa a efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.

e) Ausencia de fuerza mayor.

f) Que no haya transcurrido un año desde el momento en que se produjo el hecho causante.

5ª.- A la vista de los informes obrantes en el expediente resulta acreditado que el origen de los daños se halla en los destrozos producidos por el oso en dos colmenas propiedad de D. xxxxx.

En cuanto al fondo de la cuestión planteada este Consejo Consultivo estima, al igual que los órganos que han informado a lo largo del procedimiento, que existe responsabilidad por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los daños producidos, al concurrir todos los requisitos mencionados en la consideración jurídica 4ª del presente dictamen.

De acuerdo con el artículo 3, apartado 7º, del Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del oso pardo en la



Comunidad de Castilla y León y se aprueba el plan de recuperación del oso pardo, "serán indemnizables, previo expediente incoado al efecto, los daños y perjuicios que ocasionalmente pueda causar esta especie en todo el territorio de la Comunidad y que sean debidamente comprobados".

Se deduce del expediente que en el caso que nos ocupa los daños fueron producidos por el oso. Siendo el oso pardo, tal como señala el mencionado Decreto 108/1990, especie protegida y catalogada en peligro de extinción por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, que regula el catálogo nacional de especies amenazadas, y concurriendo el resto de requisitos expuestos, tal como se desprende del informe del agente forestal y de la conformidad expuesta por el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, la consecuencia es el deber de la Administración de indemnizar por los daños sufridos.

6ª.- La única discrepancia que suscita el presente expediente es la relativa a la cuantía a reconocer al reclamante, puesto que éste solicita en su primer escrito una indemnización por los daños sufridos de 621 euros, que asciende a 657 euros en su escrito de alegaciones, al considerar que han sido tres las colmenas destrozadas por el oso.

Por el contrario, la Administración, en la valoración inicial de daños efectuada por el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, considera que la indemnización que procede reconocer al reclamante asciende a 279,84 euros. Ésta cantidad se incrementa en la propuesta de resolución hasta alcanzar los 339,84 euros, al haberse apreciado un error en aquella valoración.

Pues bien, este Consejo Consultivo considera procedente indemnizar a la parte reclamante con la cantidad de 339,84 euros, que arroja la segunda valoración –corregida objetivamente en la propuesta resolutoria–, al merecer ésta el crédito del Consejo a la vista de la fundamentación que la sustenta, de que ha sido realizada objetivamente por técnico competente y de que únicamente ha quedado probada en el expediente la destrucción de dos colmenas, tal como refleja el informe del guarda forestal, y no de tres, como sostiene el reclamante.



En cualquier caso, y tal como sostiene la propuesta de resolución, el importe de esta indemnización deberá actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

III CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla y León informa:

Procede dictar resolución estimatoria parcial, por importe de 339,84 euros, en el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado como consecuencia de la reclamación presentada por D. xxxxx debido a los daños ocasionados por el oso en unas colmenas.

No obstante, V.E. resolverá lo que estime más acertado.